



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010042925 DEL 30/03/2017

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa”

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el Municipio de MAGANGÜE del Departamento de BOLÍVAR, es de categoría 6 y como no fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010057305 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia decidió DESCERTIFICAR al Municipio de MAGANGÜE del Departamento de BOLÍVAR, por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

- “Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo, para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complementa o sustituya.”

La referida resolución se notificó por aviso al Municipio de MAGANGÜE, el día 16 de noviembre



C014/5927



C014/5927

de 2016, tal y como se observa en el expediente.

Que el municipio de MAGANGUÉ del Departamento de BOLÍVAR, no interpuso recurso de reposición contra la resolución de descertificación, en razón a lo cual, el referido acto administrativo quedó en firme el 1 de diciembre de la misma anualidad.

Que el municipio de MAGANGUÉ del Departamento de BOLÍVAR, a través del radicado 20165290882322 de 26 de diciembre de 2016, solicitó la revocatoria directa de la resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y DOCUMENTOS APORTADOS CON LA SOLICITUD DE REVOCATORIA

2.1 De los argumentos del ente territorial

Como argumentos, se alegaron los siguientes por parte del ente territorial:

2.1.1 Manifestó que *"por un error involuntario se traspapeló la notificación por aviso recibida en la recepción de la Alcaldía Municipal de Magangué, lo que motivo a no enterarnos oportunamente de la decisión emitida por la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, motivo por el cual se está presentando esta solicitud de revocatoria directa."*

2.1.2 Afirmó que, los acuerdos municipales reportados han sido aplicados y acatados durante la vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, y que a su vez las empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo que operan en el casco urbano del municipio, han venido aplicando los porcentajes de subsidios y aporte solidarios establecidos en dichos acuerdos.

2.1.3 Señaló que, reportó en el FUT en la categoría de *"gastos de Inversión"* el pago por concepto de subsidios con los códigos establecidos para el reporte de la fuente SGP-APSB; esto va en la coordinación con la autorización de giro directo para el pago por concepto de subsidios a las empresas.

2.1.4. Manifestó también que, en el año 2016 se expidió el Acuerdo Municipal No. 028 del 2016 que regula lo concerniente a los subsidios y las contribuciones.

2.1.5. Finalmente adujo que el municipio ha sido diligente con sus obligaciones y que actualmente está atravesando una difícil situación financiera con la ola invernal que azota a la población urbana y rural de Magangué, por lo que requiere contar con la administración de los recursos del SGP - APSB, por lo cual invoca el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

2.2 De los documentos aportados con la solicitud de revocatoria.

Con el radicado No. SSPD 20165290882322, por medio del cual se sustentó la solicitud de revocatoria directa, el municipio aportó la siguiente documentación:

2.2.1. Certificación emitida por la Tesorera Municipal de Magangué, donde da constancia que se ejecutaron los recursos del FSRI, cancelando los subsidios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de la vigencia 2015.

2.2.2. Poder para actuar y documentos que acreditan la representación legal del municipio.

2.2.3. Resolución No. SSPD 20164010057305 del 30 de septiembre de 2016.

El anterior documento, en su valor legal, se incorpora al expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL ENTE TERRITORIAL

La figura jurídica de la revocatoria directa, consiste en la potestad legal atribuida a la administración en cabeza del funcionario que profirió el acto o en su defecto a su superior jerárquico, de oficio o a petición de parte, para que suprima de la vida jurídica una decisión administrativa contraria a la Constitución Nacional o a la ley; al interés público o social, o atenten contra él; o cuando cause un agravio injustificado a una persona, causales previstas en el artículo 93° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que dispone:

"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.*
2. *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
3. *Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".*

Ahora bien, teniendo en cuenta que el municipio manifiesta que, con la decisión cuya revocatoria solicita se pudo configurar un agravio injustificado, este Despacho procederá a analizar los argumentos establecidos por él, con el fin de establecer si existe procedencia o no respecto a la revocatoria solicitada.

- **Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo, para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya**

El solicitante manifestó que los acuerdos reportados han sido acatados durante las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, y que las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo que operan en el casco urbano del municipio han venido aplicando los porcentajes.

Señaló también que, el año 2016 se expidió el Acuerdo Municipal No. 028 del 2016, que regula lo concerniente a los subsidios y las contribuciones.

Finalmente adujo que el municipio ha sido diligente con sus obligaciones y que actualmente está atravesando una difícil situación financiera con la ola invernal que azota a la población urbana y rural de Magangué, por lo que requiere contar con la administración de los recursos del SGP - APSB, por lo cual invoca el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

Ahora bien, con ánimo garantista, este Despacho procedió a verificar lo ocurrido con el requisito que determinó la descertificación, así como la alegación del apoderado del ente territorial, encontrando que la exigencia normativa cuyo incumplimiento es objeto de debate, consiste en el reporte efectuado en el Sistema Único de Información (SUI) del Acuerdo municipal No. 15 de 7 de septiembre de 2010 y Acuerdo municipal No. 20 del 15 de diciembre de 2010, los cuales fueron expedidos con anterioridad a la Ley 1450 de 2011, sin que tengan una vigencia de cinco (5) años. Por tal motivo, esta entidad concluyó que cargó un acto administrativo que definiera los porcentajes de subsidios y aportes solidarios para la vigencia 2015, que atienda lo definido en la ley en cuestión.

A través de la estratificación, se clasifica a la población según sus condiciones socio-económicas, a efectos de permitir que la redistribución del ingreso y el principio de solidaridad que deben imperar en el régimen de tarifas para los servicios públicos domiciliarios se cumplan efectivamente (artículo 367 de la Constitución). La Ley 142 de 1994 en este caso, hace uso de este mecanismo para determinar qué sectores de la población deben además de pagar los costos propios de los servicios públicos de que son usuarios, asumir un pago extra, a fin de colaborar con ese otro sector de la población que no tiene los recursos suficientes para cubrir los costos reales de estos servicios.

En este orden de ideas, la Ley 1450 del 16 de junio del 2011, determinó unos porcentajes máximos de subsidios y mínimos de contribuciones que los municipios deben observar a la

hora de expedir el acto administrativo que los establezca, además de señalar que dichos factores aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco años.

Bajo esta contexto, el Despacho encuentra que los acuerdos reportados por el municipio los cuales fueron objeto de reproche, se expedieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1450 del 2011, esto es, antes del 16 de junio de 2011, y por tanto, la vigencia de cinco (5) años establecida en el parágrafo 1 del artículo 125 de esa Ley¹, no le era aplicable, de ahí que para el año 2015, los acuerdos en comento no se encontraran vigentes.

Al respecto, es necesario recordar que los actos administrativos que determinaban los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, expedidos con anterioridad al 16 de junio de 2011, tenían una vigencia anual, de conformidad con la metodología señalada en el Decreto No. 1013 de 2005, compilado por el Decreto 1077 del 2015, razón por la cual, los acuerdos bajo estudio no pueden ser tenidos en cuenta dentro del proceso de certificación que nos ocupa, para acreditar el requisito en discusión.

En consecuencia, una vez transcurrido el término para verificar que el ente territorial hubiera dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del decreto 1077 de 2015, sin reportar un acuerdo municipal que regulara lo atinente a los subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2015, ajustado a la Ley, este Despacho no tenía otra opción más que la descertificación.

Ahora bien, llama la atención, que pese a que el municipio fue notificado debidamente de la decisión de descertificación, se abstuvo de interponer recurso de reposición bajo la excusa de que el aviso de traspapeló, por lo cual se advierte que sus argumentos no permiten controvertir la decisión adoptada por el Despacho, toda vez que la revocatoria directa no es una instancia que permita al ente territorial revivir términos procesales, los cuales, conforme al artículo 13° de la Ley 1564 de 2012 son de orden público:

"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley".

La Corte Constitucional se ha pronunciado así al respecto², en los siguientes términos:

"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas.", además advierte que "(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo." (...) En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso".

Así las cosas, es claro que la figura de la revocatoria establece unas causales taxativas y específicas de procedencia que no se acreditan en el caso concreto y máxime cuando esta evidenciado el incumplimiento del requisito en cuestión y que la resolución de descertificación fue proferida y notificada conforme a derecho.

Sobre el particular, se debe señalar que tal y como previamente fue expuesto la resolución de descertificación fue proferida conforme a la Constitución y la Ley; así mismo, con ésta no se causó agravio injustificado al ente territorial ni un perjuicio al interés públicos o social, toda vez que está en el resorte del municipio cumplir con las normas que le ataen en cada uno de los

¹ Parágrafo 1°. Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante estos factores podrán ser modificados antes del término citado, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones. (Destacado fuera de texto).

² Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008; MP: Doctor Jaime Araújo Rentería.

procesos y asumir las consecuencias establecidas en las normas en caso de incumplimiento, sin perjuicio de lo cual es claro que en dicho caso el Departamento es quien debe administrar los recursos del SGP APSB y para ello **está obligado a hacerlo conforme lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007**.

En este orden de ideas, el municipio no será privado de los recursos que le corresponden, únicamente no será quien los administre ya que ello corresponderá al Departamento de BOLÍVAR.

De lo anterior es claro que, si el municipio no quiere ser sujeto a una descertificación, tiene que cumplir las normas que le son aplicables, en los tiempos establecidos por estas para tal fin y en un supuesto de descertificación debe asumir las consecuencias de la misma **sin afectar la prestación de servicios públicos a sus usuarios**.

Para finalizar, en cuanto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, cabe aclarar que según lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, este principio constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico, el cual sin embargo, **no es excluyente de las normas procesales ni preferentes de las normas sustanciales**. Sobre este tema la Corte Constitucional, se pronunció así:

"(...) Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas (...)"

Lo anterior para referir que, esta superintendencia en ningún momento desconoce dicho principio, toda vez que como se demostró en el presente acto administrativo, la decisión adoptada se ajustó a derecho en todas sus partes.

Como corolario de lo expuesto, al no configurarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, no se revocará la decisión cuya revocatoria es solicitada por el municipio.

En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- NO REVOCAR la Resolución No. SSPD 20164010057305 de 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al apoderado alcalde del Municipio de MAGANGUÉ, del Departamento de BOLÍVAR, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

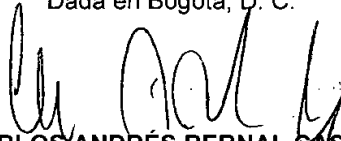
ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de BOLÍVAR, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

³ Corte Constitucional. Sentencia C-1512 del 8 de noviembre 2000. MP Alvaro Tafur Galvis

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS

Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Juan Carlos Caro – abogado contratista DAAA

Revisó: Vanessa Benavides – abogada contratista – Grupo de Certificaciones e Información

Expediente: 2016401351600929E